

TERCERO. Turno. Por auto de **cinco de marzo de dos mil veinticuatro** se turnó el expediente al Magistrado **Édgar Ulises Rentería Cabañez**, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

Lo anterior, en atención a lo ordenado en el **Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial** por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el **catorce de septiembre** del citado año, y el **Aviso General** dirigido a las personas Titulares de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, de quince del mismo mes y año.

Asimismo, se **returnó** el asunto para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, a la **Magistrada Karla Medina**



ARIEL NOVELO BE
706a6620636a6633000000000000000000189fd
18/05/29 10:22:36

Lo anterior es así, pues de acuerdo con la certificación hecha por el secretario del tribunal responsable (foja 28 del cuaderno de amparo), la sentencia reclamada se notificó a la parte quejosa el **veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés**, tal notificación surtió efectos el mismo día, conforme al artículo 747, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo; por lo que, el plazo para promover el juicio de amparo inició el **veintinueve siguiente** y concluyó el **tres de enero de dos mil veinticuatro**.

Por lo tanto, si la demanda se presentó el **tres de enero de dos mil veinticuatro**, es inconcuso que el amparo se promovió oportunamente, pues se promovió el **décimo quinto** día hábil, esto es, dentro del término legal.

2 “3. *Apoderados legales y autorizados*
Con fundamento en el artículo 692, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, se reconoce a
******* , (...), *como apoderados legales de la parte actora, en virtud a la*
designación de poder inmersa en la demanda; de igual forma se les reconoce el carácter de
asesores legales del promovente, pues acreditan ser licenciados en derecho, y a que fueron
exhibidas copias simples de diversas cédulas profesionales, tal y como se desprende de la
certificación de cuenta de la que se aprecia que se encuentran facultados para ejercer la profesión
de referencia”. (visible en el expediente electrónico vinculado).



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TERCERO. Existencia del acto reclamado. Quedó acreditado con el informe rendido por el Juez de Distrito del tribunal responsable y con las actuaciones originales que remitió para justificarlo, así como con el expediente electrónico *****, disponible para su consulta en el Sistema Integral de Gestión de Expedientes.

CUARTO. Consideraciones de la resolución reclamada. Es innecesaria su transcripción puesto que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca esa obligación.³

QUINTO. Conceptos de violación. Contra la sentencia impugnada, la parte quejosa expone diversos conceptos de violación, cuya transcripción tampoco es obligatoria.⁴

SEXTO. Antecedentes. Las constancias que integran el expediente laboral y el expediente electrónico informan aquéllos que resultan indispensables para resolver la presente litis constitucional, siendo relevantes los que a continuación se exponen.

Presentación demanda laboral. El **tres de agosto de dos mil veintitrés**, ***** demandó a la ***** y al **Instituto Mexicano del Seguro Social**. Al primero de ellos, la inscripción retroactiva y el pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, del periodo del 22 de septiembre de 1988 al 6 de diciembre de 1995 y del 8 de diciembre de 1995 al 30 de junio de 1996.

Del segundo de los nombrados, reclamó la inscripción de manera retroactiva en el régimen obligatorio dentro del periodo del 22 de septiembre de 1988 al 6 de diciembre de 1995 y del 8 de diciembre de 1995 al 30 de junio de 1996, el reconocimiento de 405 semanas

³ Es aplicable la tesis aislada XVII.1o.C.T.30 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, registro 175433, de rubro **“SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.”**

⁴ Se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 164618, cuyo rubro establece “**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**”

El Instituto Mexicano del Seguro Social solamente le reconoce cotizaciones de la patronal ***** ** ***** el 7 de



7

Para sustentar lo anterior, manifestó el alta y baja con cada patrón que laboró, el nombre de éste y semanas que cotizó, como se advierte del cuadro siguiente:

ALTA	BAJA	PATRÓN	PUESTO	SEMANAS
22/9/1988	12/12/2016	***** ***** ** *****	**** **	1,473
1/7/1999	13/7/1999	***** ***** , S.A. de C.V.		1
13/12/2021	22/7/2023	Continuación voluntaria en el régimen obligatorio		84
Total de semanas cotizadas				1,556

En su mismo escrito la parte actora propuso las siguientes probanzas:

1. **Documental** consistente en documento original de la constancia de no conciliación emitido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de 15 de diciembre de 2022, donde se acredita la instancia conciliatoria con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. **Documental** consistente en documento original de la constancia de no conciliación emitido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de 15 de diciembre de 2022, donde se acredita la instancia conciliatoria con *****
***** ** *****.
3. **Documental** consistente en copia simple del convenio de terminación laboral firmado y ratificado por *****
** ***** y el actor, y su cotejo.
4. **Documental** consistente en copia simple de la constancia de semanas expedida en favor del actor por el Instituto Mexicano del Seguro Social y su cotejo.
5. **Documental** consistente en copia simple de credencial para votar a nombre del actor.
6. **Documental** consistente en copia simple de la cédula profesional de ***** y *****
*****.
7. **Confesional expresa.**
8. **Confesional tácita.**
9. **Instrumental de actuaciones, jurisprudencias.**

***** , en contra de ***** e *****

El actor adquirió los servicios de seguro de salud para la familia bajo la modalidad 32, en el periodo del 13 de diciembre del 2021 a la fecha de presentación de demanda, es decir, solo pagó los servicios para recibir atención médica y no pensión del régimen obligatorio del Instituto demandado.

El actor fue inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras laboró en ***** ** *****.

SÉPTIMO. Ley Federal del Trabajo aplicable. El uno de mayo de dos mil diecinueve se publicó en Diario Oficial de la Federación,

Los artículos décimo y décimo primero transitorios⁷ de la Ley de Amparo, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 7 de junio de 2021, disponen que las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor de ese Decreto mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción y que las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios, mantendrán ese carácter.

La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito.

7 **Décimo.** Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción.

Décimo Primero. Las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios, mantendrán ese carácter. Únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto podrán constituir jurisprudencia por precedente.

“(…) Segundo. Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo vigente con anterioridad a la publicación de este Decreto. Lo anterior, a efecto de que:

I. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de ocho votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.

II. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las



Entonces, las jurisprudencias por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción, que se citarán en el presente asunto, conservan su obligatoriedad en términos de las reformas a la Ley de Amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021 y 13 de marzo de 2025.

NOVENO. Estudio. El único motivo de disenso externado es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, aunque suplido en su deficiencia, como lo permite el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo.

En dicho concepto de violación el quejoso aduce, que la resolución impugnada le causa agravio, ya que ésta es carente de exhaustividad y congruencia, violentándose las formalidades esenciales del procedimiento laboral, pues no se respeta la aplicación del principio *pro persona*, el cual se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona.

autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.

III. Para la emisión de la declaratoria general de inconstitucionalidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación requerirá que ésta se apruebe por mayoría de cuando menos ocho votos.”

Tercero. Lo previsto en el transitorio anterior será aplicable en la resolución de todos los asuntos que se encuentren admitidos o pendientes de resolución al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, independientemente de la etapa en la que se encuentren dichos asuntos; así como para los que se admitan con posterioridad, y previo a la toma de protesta referida en el artículo anterior.

Expone, en el juicio natural se evidenció el incumplimiento a la Ley del Seguro Social en relación a lo dispuesto por los artículos 12 fracción I, 19 fracción I y 21 de la Ley del Seguro Social régimen 73, con lo cual también se violenta el derecho de seguridad social, derechos estos que se encuentran establecidos en los artículos Constitucionales 1º 17º y 123º.

Insiste, demandó el cumplimiento de los artículos 12 fracción I, 19 fracción I y 21 de la Ley del Seguro Social régimen 73, por la vía ordinaria laboral, vía que era la correcta al no reclamarse alguna otra prestación, en dinero o en especie, de alguno de los seguros del régimen obligatorio del seguro social.

En efecto, el hoy quejoso, trabajador **jubilado** de *****
***** ** ***** , en fecha **tres de agosto de dos mil**
veintitrés, promovió **juicio ordinario laboral** en contra de dicha

A fin de dar cumplimiento a la prevención efectuada, el promovente presentó un escrito vía electrónica el once de agosto de dos mil veintitrés, en el que manifestó:

Entonces, es evidente que este H. Tribunal Laboral violentaría en perjuicio de mi mandante numeral 17 de nuestro Código

Una vez que se ha dado cumplimiento a la prevención ordenada por este H. Tribunal, y en términos de lo dispuesto por el numeral de la 873-K Ley Federal del Trabajo SOLICITO a Usía subsane el proveído dictado por el secretario instructor en fecha 08 de Agosto de 2023, lo anterior por las omisiones y errores contenidos en el proveído señalado en líneas anteriores. Me permito transcribir el numeral en comento para los efectos legales a que haya lugar.

“Artículo 873-K.” (Se transcribe).”

“1. Desahogo y análisis de la prevención

Del ***** reclama la obligación de éste en subrogarse a los derechos del actor respecto a los periodos en que la ***** fue omisa en cubrir las cuotas obrero-patronales que le correspondían. No obstante, el actor señala que no se reclama pago de alguna prestación en dinero en contra del ***** fuera de lo manifestado en sus escritos de demanda y de cumplimiento a la prevención.

En auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se obtiene que se previno de la siguiente forma:

a. Manifieste si es su deseo reclamar alguna prestación, en dinero

[...]"

ARIEL NOVELO BE
706a6620636a663000000000000000000189f6
18/05/29 10:22:36

Así, para arribar a la conclusión de que la acción intentada era improcedente, el Juez laboral adujo que en términos de lo establecido por la extinta Segunda Sala, el demandar la inscripción retroactiva, y como consecuencia, el reconocimiento de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debía necesariamente estar vinculado con la solicitud de alguna prestación en dinero o en especie que justificara la tramitación de un juicio desde una perspectiva práctica, es decir, la obtención de una prestación concreta y no únicamente la emisión de una declaración.

Sostuvo, que de estimarse lo contrario, significaría la posibilidad de emitir resoluciones meramente declarativas, por derivar de una pretensión carente de un propósito real y efectivo, lo cual soslayaría que, entre las razones que dieron origen a la creación del mencionado precepto normativo, se encuentra la carga de trabajo que representan dichos asuntos (los tramitados en la vía especial).

De la demanda inicial se desprende que **la acción principal**
que promovió el actor fue en contra de *** ***** ****

***** , de quien demandó la **inscripción retroactiva** y el pago



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se generaron por la relación laboral del actor dentro del periodo comprendido del 22 de septiembre de 1988 al 6 de diciembre de 1995 y del 8 de diciembre de 1995 al 30 de junio de 1996.

De forma subsidiaria, demandó a dicho instituto para que se subrogara en sus derechos por el período antes señalado en el que laboró para la patronal demandada ***** ** *****.

Sin embargo, el secretario instructor dio trámite al asunto como un conflicto individual de seguridad social.

Con motivo de ello, en la sentencia impugnada, el tribunal responsable ubicó el reclamo del actor como un conflicto de seguridad social que se rige por lo dispuesto por los artículos 892 y 899-A de la Ley Federal del Trabajo, y se tramitan en la vía especial, siendo los conflictos individuales de seguridad social los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

No se comparte el proceder del Juez, puesto que en los términos en que fue planteada la demanda, debe entenderse que el actor instó dos acciones diversas:

1.- En lo principal contra ***** ** *****
consistente en la inscripción retroactiva en el régimen obligatorio de un
periodo en el cual el actor prestó sus servicios, así como el pago de
las cuotas obrero patronales omitidas, derecho consagrado en la Ley
del Seguro Social, y

2.- Contra el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, como una consecuencia de la primera, consistente en que ese instituto se subrogue en los derechos del hoy actor y le reconozca las semanas que debieron ser cotizadas en el régimen obligatorio dentro del

Por tanto, y dada la forma como se demandó la acción principal, ésta debe entenderse relacionada contra ***** ***** **

“Artículo 892.- Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153- X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III, 484, 503 y 505 de esta Ley, así como los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios, la designación de beneficiarios del trabajador fallecido, con independencia de la causa del deceso, o desaparecido por un acto delincuencia, y los conflictos en materia de seguridad social.”



- La “Sección primera”, denominada “Conflictos Individuales de Seguridad Social” de la Ley Federal del Trabajo, surge del proceso legislativo que diera lugar a la legislación obrera que se comenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación de doce de noviembre de dos mil doce.
- En dicho proceso legislativo, se expuso la necesidad de establecer un procedimiento sumario para tramitar los conflictos suscitados con motivo del otorgamiento de prestaciones de seguridad

social, aportaciones de vivienda y prestaciones derivadas del sistema de ahorro para el retiro.

- Para tal efecto, se establecieron requisitos que deben contener las demandas de este tipo de conflictos, los elementos que deben contener los dictámenes médicos en los casos de riesgos de trabajo y las reglas para el desahogo de esta prueba.
- Por tratarse de un procedimiento especial se consideró necesario regular, entre otras cuestiones: los sujetos legitimados para promover los conflictos; los requisitos y datos que contendrían las demandas, y la carga de la prueba para los organismos de seguridad social, cuando existiera controversia sobre diferentes hechos.
- Era necesario recordar también que dentro de los principios que imperan en el procedimiento del trabajo permea la necesidad de acortar y agilizar el proceso laboral atento el derecho humano a una justicia pronta y expedita, reconocido en el artículo 17 de la Constitución General de la República; principio que despusna en el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo.
- La intención del legislador, al adicionar dentro del “Capítulo XVIII”, de los “Procedimientos Especiales”, la “Sección Primera”, de “Conflictos Individuales de Seguridad Social”, fue la de otorgar celeridad a la solución de ese tipo de conflictos -mediante un procedimiento sumario-, aún mayor a la que se otorga a los procedimientos ordinarios; esto, en razón a que los conflictos suscitados con motivo del otorgamiento de prestaciones de seguridad social, aportaciones de vivienda y prestaciones derivadas del sistema de ahorro para el retiro, representan más de la mitad del tipo de los asuntos que debe resolver la Junta Federal.
- Para lograr una rápida solución del conflicto, fue necesario establecer las reglas a las que debe ajustarse el procedimiento y los requisitos que deben contener las demandas respectivas; como la



forma idónea de lograr de manera pronta y expedita justicia en materia de seguridad social.

- Dentro de las reglas establecidas por el legislador, para alcanzar la finalidad indicada, es importante destacar que en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, estableció cuál es la finalidad de ese tipo de procedimiento especial, al precisar que los conflictos individuales de seguridad social: "... son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie...".
- En el procedimiento especial relativo a los conflictos individuales de seguridad social, es factible reclamar el reconocimiento, e incluso la expedición de la constancia relativa, de semanas cotizadas en el régimen obligatorio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, tal pretensión necesariamente deberá perseguir, en términos de lo dispuesto en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie.
- La petición del reconocimiento de mérito, deberá vincularse con alguna otra pretensión que concrete algún derecho o beneficio de seguridad social, verbigracia, el otorgamiento de pensión. Pensar de otra manera significaría, por una parte, la posibilidad de emitir una resolución meramente declarativa, por derivar de una pretensión carente de un propósito real y efectivo; y, por otra parte, porque de esa manera se soslayaría que entre las razones que motivaron al creador de la norma destacó la carga de trabajo que representan esos asuntos

Como puede observarse, el análisis efectuado por la desaparecida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se circunscribe a supuestos en los que **se haya reclamado únicamente el reconocimiento de semanas cotizadas** al Instituto Mexicano del Seguro Social y dicho reclamo se haya llevado a cabo en un **conflicto individual de seguridad social** tramitado en la **vía de procedimiento especial**.

En consecuencia, la sentencia reclamada deriva de un procedimiento en el que no se respetaron las formalidades de la **vía ordinaria** prevista en la Ley Federal del Trabajo, lo que afectó las defensas de la parte quejosa y trascendió al resultado de la sentencia, por lo que se violenta en su perjuicio el derecho fundamental de debido proceso que se reconoce en el artículo 14 constitucional.

Aunado a lo anterior, cabe puntualizar que al no seguirse el juicio de origen de acuerdo con las formalidades que exige la Ley Federal del Trabajo se causa agravio al peticionario de amparo, ya que no se le administró justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes, como dispone el artículo 17 de la Constitución Federal.

Además debe precisarse que cuando se tramita un procedimiento en la vía incorrecta, esa sola circunstancia es contraria a la garantía de seguridad jurídica y por sí misma, trasciende en los derechos fundamentales de las partes, con independencia de que se pueda considerar que los actos procesales realizados contrarios al procedimiento adecuado no afecten a las partes, ni las deja en estado de indefensión, ni modificaron las cargas procesales o limitaron sus derechos de defensa.

Lo anterior fue considerado así por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 410/2010, que dio lugar a la jurisprudencia 90/2011, en la que se determinó que la tramitación de un juicio en la vía incorrecta constituye una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, contra la que no puede invocarse el retardo en la solución del asunto como causa para no conceder el

Lo anterior encuentra sustento en los siguientes criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Entonces, esas condiciones que se establecen previniendo los posibles conflictos que puedan darse, son mecanismos útiles para preservar la seguridad jurídica de los implicados en la tutela jurisdiccional. Así, el solicitante sabrá exactamente cuándo y ante quién debe ejercer su derecho, los requisitos que debe reunir para hacerlo, los plazos para ofrecer y desahogar sus pruebas, la forma de fijar las cargas procesales, entre otros

aspectos relevantes que regirán el juicio. De la misma manera, la parte demandada sabrá cuándo y cómo contestar la demanda, ofrecer y desahogar sus pruebas, y la consecuencia jurídica que acarreará el que no comparezca a defender sus derechos, o lo haga sin controvertir adecuadamente los hechos y pretensiones del actor, entre otros aspectos relevantes que regirán el desenvolvimiento del juicio, ya que esas condiciones pueden variar dependiendo de cada uno de los procedimientos establecidos por las leyes procesales.

De lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse que los diversos procedimientos que el legislador prevé para el cumplimiento del derecho de acceder a la justicia existen con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados que sabrán de antemano las reglas que regirán el proceso correspondiente, lo que de suyo les permitirá preparar adecuadamente su defensa, y obtener una resolución favorable a sus intereses, independientemente de que se tenga la calidad de actor o demandado; y, por tanto, con el solo hecho de seguir un procedimiento en una vía incorrecta se violan los derechos sustantivos de las partes en el proceso, pues no se respeta esa garantía de seguridad jurídica, provocando con eso violación al artículo 17 constitucional, debido a que no se administra justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes.

De esta forma, como ha quedado establecido, la vía es un presupuesto procesal, por lo que debe seguirse necesariamente la establecida por la ley para el caso concreto, de ahí que en principio, deba estimarse que causa agravio a las partes el que se siga un procedimiento en una vía que no es la correcta; sin embargo, para que dicho agravio constituya uno de los que puedan examinarse en el amparo directo, es preciso establecer, si a partir de que la autoridad lleva a cabo un procedimiento en vía incorrecta, constituye una violación que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo.

Ahora bien, sobre el particular esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 410/2010, se pronunció en el sentido de que el hecho de que la autoridad correspondiente tramite un procedimiento en la vía incorrecta, constituye una violación a las normas del procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que trasciende al resultado del fallo reclamado, en su perjuicio. Por lo que se reúnen los requisitos para que dicha infracción al procedimiento pueda ser reclamada en amparo directo.

Lo anterior se ve reflejado en la jurisprudencia que emanó de la referida contradicción de tesis:

'Novena Época. Registro digital: 161791. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, junio de 2011. Materias laboral y común. Tesis: 2a./J. 90/2011. Página 325. PROCEDIMIENTOS ESPECIAL U ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR AFECTAR LAS DEFENSAS DE LAS PARTES Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL LAUDO...'

“PROCEDIMIENTO LABORAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO, CON TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO, QUE PARA SER ESTUDIADA, DEBE SER PLANTEADA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.

Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que la tramitación de un juicio laboral en la vía equivocada constituye una infracción a las normas del procedimiento, que para ser analizada debe plantearse en los conceptos de violación de la demanda de amparo, en los que se expresen las razones por las cuales se considera que tal violación trascendió al sentido del fallo en perjuicio del quejoso; ello en apego a lo que dispone el artículo 174 de la Ley de Amparo.

Sobre el particular, conviene referir que acorde a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, los procedimientos seguidos en la vía ordinaria y en la vía especial, tienen una tramitación distinta,

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

siendo las distinciones más relevantes, los plazos procesales para
ACIÓN
contestar, formular réplica y contrarréplica.

En efecto, el artículo 873-A de la ley laboral, establece el plazo de quince días para que el demandado produzca su contestación, y el diverso 873-B, dispone que el actor tendrá el plazo de ocho días para formular réplica, mientras que acorde a lo preceptuado en el numeral 873-C, el demandado cuenta con cinco días para plantear la contrarréplica, el cual además indica que la audiencia preliminar habrá de llevarse a cabo en el término de diez días.

Por otra parte, el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, establece el término de diez días para que el demandado pueda producir su contestación, el diverso de tres días para que el actor formule réplica y el mismo plazo se otorga al demandado para presentar su contrarréplica.

Ahora bien, al margen de las diferencias en el trámite de ambos juicios, lo cierto es que, el perjuicio que se ocasionó al quejoso, al seguir un juicio en la vía incorrecta, consiste fundamentalmente, en el hecho de que el juzgador responsable determinó la improcedencia de la acción intentada, precisamente en atención a la imposibilidad de acceder a la pretensión intentada a través del conflicto individual de seguridad social seguido en la vía especial, de ahí la trascendencia en el presente caso.

Cabe destacar, que la violación procesal aludida trasciende al sentido del fallo, sin que el estudio de forma o fondo del asunto, pudiera generar al quejoso un beneficio mayor, porque en tratándose de dicha violación procedimental, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia vinculatoria ha sostenido, se reitera, que cuando un asunto se tramite, como en el caso, en la vía incorrecta, esa sola circunstancia es contraria a la garantía de seguridad jurídica y, por sí misma, repercute en los derechos fundamentales de las partes.

“PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBTENERSERSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL).

Criterio jurídico: La incorporación al Texto Constitucional de la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos procedimentales no es irrestricto sino que está condicionado a que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. Por tanto, si con la tramitación de un juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, no se cumplen los requisitos constitucionales para obviar dicha violación procesal con base en ese principio.

ARIEL NOVELO BE
706a6620636a6533000000000000000000189fd
18/05/29 10:22:36



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

167115692_0157000034317538004.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE						
Nombre:	ARIEL NOVELO BE			Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA						
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.01.89.fd			Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/09/26 17:00:38 - 11/09/26 11:00:38			Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256					
Cadena de firma:	0c 46 17 0e 1d 2a 6a 19 9b bb 96 0d ac f5 6f c2 79 b6 ad 49 40 36 a3 90 b4 ae ca 72 47 e9 a0 51 c6 3d ad 03 bb 9d 3b cf 26 4a 5f ed c7 56 47 69 7f 15 7b d1 df 98 d3 08 d4 8c 90 03 b0 8d ec a9 a3 66 00 26 80 ce 17 86 cd 04 63 2c ea cf 5c 98 86 b1 04 4f 3b bc 8e d7 09 62 17 55 1e 3f f8 47 3e 3c ff 58 1e f4 0c f0 4c 61 cf b2 ce 5a 62 c8 d4 19 34 49 ff 22 ec a7 50 de 55 b5 cc 64 bb 99 1b f8 7c e5 78 7a 4d 4d cf 36 ce 4e ba 4f 24 09 7c da 4e b0 f0 40 37 87 84 af dc 74 21 48 e4 ca 3c 9b 07 3a f2 4a 9d fe 0b 0c 82 96 fc 97 92 ec 86 82 f9 04 11 98 c8 81 a0 a8 28 12 90 b9 a4 2e 30 37 00 54 91 8c 0c 1b 5a b0 40 b3 6b e1 7c 17 38 b8 79 c2 05 c3 13 08 f7 6c 83 ab c6 4b 7e f9 bd c5 55 0c 06 7a 20 c5 85 7f 68 eb 3c a2 3c 17 0c 41 a5 f1 b7 32 d1 8c 57 a3 23 2e c6 33 c8 ed fb 29 17 3d 4a b8 2b 09 bf e9 c3 74 a1 e6 61 b6 82 46 8b 1c 89 9e a7 55 8d ed 3a d8 85 f5 51 6f e0 31 fa c9 3a f0 3a 69 4b 6b 48 8e 6d d8 fa fd 2e f6 57 7e 56 10 d6 e2 61 fd 31 df 64 b1 da 7b be f9 4f a3 0a 86 28 3e 3a 7c f9 bc 3b 85 18 59 8d f2 a4 e3 c0 e6 99 57 e9 7c 82 16 43 bf 1f d9 e0 6a 8e 1c ff ec fa 04 55 87 3c 0c 49 73 b9 80 08 38 6b b7 37 81 88 d1 e7 b3 24 87 a4 54 57 d2					
OCSP						
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/09/26 17:00:38 - 11/09/26 11:00:38					
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal					
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal					
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.01.89.fd					
TSP						
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/09/26 17:00:38 - 11/09/26 11:00:38					
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal					
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal					
Identificador de la respuesta TSP:	205332041					
Datos estampillados:	NaxOOCQ2+pt27fmZCL+nHloKXOk=					



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	MARIA NORA MACARENA GARZA GUERRA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.68.8e	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:10:33 - 11/09/26 12:10:33	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	87 7f bb f3 06 8a c6 b6 64 42 e3 07 82 26 89 c5 3f ae e1 ae db 91 43 c2 fb f5 e3 85 d1 ac db 9f fd 59 e5 1e 35 db c4 2f e3 35 fb 13 b4 36 9c b9 4c 06 b4 05 99 cd 37 45 a4 f9 f1 a2 f7 88 f0 9e 1e 03 07 dd 40 d9 74 04 ee 46 ee 99 ed 4f 41 26 67 ec a9 4b 8c bf a1 38 0c e2 4a cf ff f9 89 13 b1 22 01 b1 75 2c 7c ee 6b e9 e2 54 69 86 96 7e 3d 32 3b ad 57 0e 9c 37 30 87 0d c0 13 65 62 ba 2f 5f bd 9c b9 84 e7 75 c9 e7 60 a8 04 dc 28 a9 1d 40 52 b0 29 7e d8 c9 3b 8a a7 7c 62 72 b8 ff 0d b1 f8 67 8e b8 cd a3 57 d2 96 6a 0f 1e bf dc 1a f2 f5 d3 c0 92 73 bc db 63 37 a6 b7 59 b1 dd 73 44 c4 ab 58 e2 59 b6 02 bd 54 ff f2 b8 5a d0 d3 8c d3 17 03 59 c0 a9 4c 38 b9 1b 92 5f 89 2b e2 3e e2 c6 60 4b 41 b2 a4 e5 68 5d ef 8a 0d ff 11 1b 36 9f ec 04 38 2a ed b9 17 49 85 36 48 e6 af a7 e8 3d ef c0 38 e9 c2 f1 ed e7 41 c0 ee c3 b5 05 4e d8 62 f1 ee 7c 1c f6 09 4c 8b 79 1b d3 11 14 cd e0 30 b9 17 0d 19 3a 55 e1 66 c4 c7 7b 57 2f d2 d7 4f f8 9f e4 9f 33 c7 2b 30 a4 b0 f0 49 c6 4d 64 7b a8 27 58 32 2d 3c 6f 2e 5f 0f 5e f1 9a c0 6d e1 7f 78 74 0f bf c9 bf f9 f8 16 01 d6 03 9b e7 ba 29 a6 94 1c 0a f3 dd 0b 6e 56 17 a3 0e 3c 18 14 ba 08 27 d8 15 73 0b b3 a1 b8 85			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:10:34 - 11/09/26 12:10:34			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.68.8e			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:10:34 - 11/09/26 12:10:34			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	205414258			
Datos estampillados:	/doFXnoN12IKdVuv2hB0KB8cpb8=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	KARLA MEDINA ARMENDAIZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.68.8a	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:15:44 - 11/09/26 12:15:44	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	5c 08 08 e3 c9 29 b7 97 57 8b 3d d9 66 05 de ab 99 e8 97 3b 3b 66 dc 8d 92 25 d3 7f d3 3b 68 ce 6a 58 13 d7 7d 95 bc 77 94 88 bb 4d d5 ec c9 41 60 f0 c7 83 1f 97 4e 10 a3 8d 0b 6a b0 28 5b 4c 9c 14 a4 d2 70 a9 0c 2f 05 72 cf 57 9b ad 35 88 d3 21 d1 65 3e ad e6 49 6c 4d 7e fa d0 4a d5 63 e1 f3 70 21 93 98 0b 3a 28 48 bd f5 49 f9 8a 42 a4 82 b5 d3 ba 6e e1 e1 3d 78 81 14 c5 58 df 90 81 eb 42 d2 f4 0a cc 0b 2a 9a ab 5d c6 46 5f 7e f2 74 75 22 46 df 8b d2 d7 5b 75 32 7c 37 cf 45 93 af 19 2f b0 87 c7 36 68 07 e4 3e 24 16 48 e5 8c 04 38 88 a1 15 db 62 cf 75 62 d8 3c 8c 66 f7 28 9b 66 7d db 0c 22 db 19 a5 de ec 03 15 b9 50 ec 9f 60 4b ce 04 c8 f7 28 16 d0 49 c2 de 9a 8e 8f 91 70 f9 d3 c3 48 89 a7 29 5f c9 ed 86 b1 e2 9e 39 a5 0f cd 4f 79 4e 1b 14 98 57 2b e7 94 b6 3e 1d 7b c6 93 f6 63 60 9c a5 67 8b 6f 26 0e 2a 9d d5 9e 9b ff ff b3 00 52 a0 7e 39 af 3a ff 6d df a4 b4 eb 8d 09 78 67 aa b2 3b bf ad b6 6d cc 0d ad a9 cf f5 23 d6 b1 52 46 62 da 10 0e 4f 6d de 7f 98 24 4f 45 ef 25 e7 00 35 7b 49 b6 44 f7 eb a7 16 eb 42 cd 5b a4 ff ed 1c 23 14 4e 8e b0 e5 06 48 4e b1 f2 4f bd 22 72 d6 74 d7 c9 c1 c6 a8 11 d4 05 ef 08 a9 3c 39 25 58 31 77 e2 b6 2f			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:15:44 - 11/09/26 12:15:44			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.68.8a			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:15:44 - 11/09/26 12:15:44			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	205420316			
Datos estampillados:	uVPllShFjglz8efnVUD//KnGSY=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ROBERTO ISIDORO LÓPEZ SANABIA		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.63.80		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:27:22 - 11/09/26 12:27:22		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	77 f0 c7 03 4a 33 80 b6 7f b4 f1 9d d4 70 d7 0d 60 df 1e 47 96 8f 8b 13 fe 9a d9 b6 31 bd 4d 31 1e cd 23 f4 18 96 a6 14 ad 16 de 6c a6 9e 30 6e d4 b3 64 d2 61 b3 5c 3e 22 4d 63 2e 9a 01 0b 01 06 6c fa c7 5f 74 cd 9e e6 85 37 43 d2 69 eb bc e2 a1 49 04 a3 76 10 44 85 44 be 41 15 3a 4d 7a 97 ee 7c f9 32 27 a5 2a e0 b7 af 97 11 8c 6c 00 da 0f 39 a0 4f 23 32 a7 4e 57 17 8a 12 e0 46 42 b0 c4 71 29 1b 77 ae 11 0e 7b 27 a5 42 ae ab 82 9c 70 19 31 b4 6d e4 38 ee ef 4d 2f fb 51 b1 bf 85 86 17 d9 80 6c d6 ce 92 12 04 23 44 c2 38 38 b9 9d 82 41 98 ab cd 2f 2d 55 f2 0f 5d 7c b5 72 f8 1e 39 24 e1 57 4e 40 5f c8 b5 ce f8 46 5f 5a 9e 9b fc fc c1 20 46 19 d1 5c 19 e5 9c a0 a3 9f 7b c4 03 fe 62 0e 1c 66 d9 ff 4e ab 56 1f c3 d7 64 ba c2 c5 3f 61 bd f8 f9 d6 26 9f a7 48 e2 df 58 f5 a3 e9 8a 09 72 45 d0 43 93 0d 0e 5f df d5 44 39 f6 bf cb 7c 9e 7c 93 85 e7 a3 45 64 17 8c a7 3e a7 ed 25 91 6e 0a 1f 1c cb 88 4b 71 bf c8 12 aa 1b ed b0 3b b7 f8 60 85 b0 ad 57 27 fa a0 a4 33 cd bb 50 b7 1a 20 a1 e6 99 18 15 a7 8a be ac 5a a7 60 1d ef f1 76 3a ce 64 30 f8 30 65 48 c6 45 d5 3a c9 9b 55 f2 8c 42 e0 f3 bd 1f 71 85 e3 56 bd 4a 24 97 f3 4f d8 2a 2b 47 58 04 12 70			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:27:22 - 11/09/26 12:27:22			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.63.80			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/09/26 18:27:22 - 11/09/26 12:27:22			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	205434553			
Datos estampillados:	sAfzJoY/ZStbGLwKs/qAakzndDk=			

El once de septiembre de dos mil veintiseis, la licenciada Cecilia Torres Carrillo, Secretario(a), con adscripción en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.